

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ante la publicación del Real Decreto-Ley 8/2021 de 4 de mayo por el cual, entre otras cosas, se reforma la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa creando una suerte de “recurso de casación exprés” contra las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia en materia sanitaria, se ve en la obligación de realizar las siguientes manifestaciones:

-Las asociaciones judiciales tenemos como finalidad principal la defensa de los intereses de los miembros de la Carrera Judicial pero también el marco normativo que nos regula nos impone el deber de defender los valores constitucionales y el Estado de Derecho. Esta importante finalidad es la que motiva el presente comunicado.

-Desde hace unos años, la incapacidad de los miembros del legislativo para alcanzar acuerdos con grupos parlamentarios distintos a los que forman gobierno, ha llevado a que, ante la ausencia de mayorías absolutas parlamentarias, las Cortes Generales apenas dicten leyes orgánicas, pero tampoco leyes ordinarias.

-La mayoría de las modificaciones legislativas (o, al menos, las más relevantes) se están haciendo por Decreto-Ley del Gobierno, lo cual supone una perversión del sistema constitucional que atribuye al Ejecutivo potestad legislativa solo en casos de extrema y urgente necesidad. Se ha convertido la excepcionalidad en norma, sustrayendo la actividad legislativa a la soberanía popular. De hecho, en el caso del Real Decreto-Ley 8/2021, la urgencia y necesidad alegadas son ficticias, ya que el estado de alarma tenía fecha prevista de finalización y las dudas sobre la suficiencia del marco legal existente para afrontar la actual situación de pandemia no son nuevas.

-Supuestos como el de la falta de renovación del CGPJ demuestran la subordinación servil del Legislativo al Ejecutivo. Las Cámaras no han sido convocadas para la renovación de los vocales del CGPJ, pese a que el proceso de remisión de candidaturas previsto en la de la Ley Orgánica del Poder Judicial está finalizado.

-No se controla la acción del Gobierno. Tenemos un Estado de Alarma de seis meses de duración sin ningún tipo de control parlamentario.

-No se celebra el debate sobre el estado de la Nación y apenas hay debates sobre política general del país. La única materia de la que se trata es la electoral.

-El Tribunal Constitucional está desaparecido de manera consciente, evitando resolver recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afectan a derechos fundamentales, hasta el punto de que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, la declaración de

inconstitucionalidad -si se produce- será ineficaz, al haber desplegado la ley anulada todos sus efectos.

-El Tribunal Constitucional, con su inacción, contribuye a la liquidación del sistema, al actuar de forma opaca en cuanto a los tiempos que maneja para la resolución de asuntos: no se sabe por qué unos van más rápidos que otros. No sólo no garantiza, por tanto, los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que constituye un obstáculo para su defensa.

-La pasividad del legislativo, la falta de impulso del ejecutivo y un Tribunal Constitucional incumplidor han obligado a los órganos judiciales a decidir sobre limitaciones de derechos fundamentales a partir de interpretaciones extensivas de normas pensadas para otros supuestos, con el riesgo que eso implica para los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El Real Decreto-Ley publicado en el día de hoy supone la confirmación de la dejación de funciones del legislativo, de la omnipotencia del ejecutivo y de la elusión de responsabilidades de este último a la hora de tomar iniciativas legislativas eficaces. Nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional grave, como es la pandemia, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional.

Desde AJFV nos vemos en el deber institucional de pedir que se reconduzca la actual situación hacia el marco de convivencia que nos dimos con la aprobación de nuestra Constitución y que en los últimos tiempos se está viendo amenazado.

En Madrid, a 5 de mayo de 2021.

COMITÉ NACIONAL

ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA